

JUZGADO DE FAMILIA - SEDE MI PERÚ

EXPEDIENTE : 00498-2019-0-3301-JR-FT-01

MATERIA : VIOLENCIA FAMILIAR

JUEZ : YOLANDA PETRONILA CAMPOS SOTELO

ESPECIALISTA : DUVEL RENE CANCHAPOMA AQUINO,

DEMANDADO : SANCHEZ MELENDEZ, WILMER APOLINARIO

AGRAVIADO: V A, N M

Q V, J E

S V, D I

S V, M M

DEMANDANTE : VALLEJOS AZUCENA, VIOLETA

AUTO FINAL

RESOLUCION NUMERO UNO

Mi Perú, siete de agosto

del año dos mil diecinueve.-

Por recibido el Oficio N° 2020-2019-REGPOL-CALLAO-DIVOPUS.3-CMP-FAMILIA cursado por la Comisaría de Villa Los Reyes, que adjunta el Informe N° 507-2019-REGPOL-CALLAO-DIVOPUS.3-CIA VLR-VF, respecto a las diligencias efectuadas en relación a la denuncia por violencia familiar en la modalidad de Violencia Física interpuesta por **VIOLETA VALLEJOS AZUCENA** en nombre propio y en representación de sus menores hijos **JHANS EDGAR QUIÑONES VALLEJOS(15 AÑOS)**, **NESTOR MARTIN VALLEJOS AZUCENA (13 AÑOS)**, **MIA MARIANA SANCHEZ VALLEJOS (08 AÑOS)** y **DANIEL ISAAC SANCHEZ VALLEJOS (04 AÑOS)** contra **WILMER APOLINARIO SANCHEZ MELENDEZ** y puesto a Despacho para emitir pronunciamiento que corresponde:

PRIMERO: Que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 1° establece que: la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física contra las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

SEGUNDO: Que, a tenor del Principio de intervención inmediata y oportuna contenida en el numeral 4 del art. 2 de la Ley N° 30364 se señala que: *“Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.”*

TERCERO Que, el plazo establecido por el art. 16° de la Ley N° 30364 es un plazo máximo de 24 horas en caso de riesgo severo identificado en la ficha de valoración de riesgo y un máximo de 48 horas , contados desde la toma de conocimiento de la denuncia, , previa evaluación del caso, se debe resolver en audiencia oral la emisión de las medidas de protección y/o cautelares requeridas que sean necesarias, no obstante, la citación a la audiencia oral para la emisión de medidas de protección, conlleva un período adicional que se posterga casi siempre por deficiencias en el emplazamiento a

la víctima, lo que originaría sobrepasar el plazo fijado por ley; más aún considerando que se debe evitar la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante conforme a lo dispuesto en el art. 18 de la indicada Ley N° 30364 (modificado por el artículo 1 de la Ley N° 30862), en razón a las consideraciones expuestas, se justifica prescindir de la convocatoria de audiencia oral para el otorgamiento de medidas de protección.

CUARTO: OBJETO DE LA LEY 30364

En nuestro ordenamiento legal interno se entiende por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, así como sexual, económica y patrimonial contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física, como las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad; siendo que dichas agresiones ya no pueden considerarse un problema privado pese a ejercerse en el interior del ámbito familiar, sino que constituye un problema social en tanto involucra cuestiones públicas y comunitarias.

QUINTO: PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Son las personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Pueden constituir causas de vulnerabilidad la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza el género, la orientación sexual y la privación de libertad.

SEXTO: SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR

Que, el presente proceso se tramita como proceso especial, siendo que el objetivo de la justicia, especialmente cuando se trata de pretensiones como la violencia familiar es dar una respuesta oportuna y eficaz, la misma que debe resolverse en el plazo máximo de 48 horas (en caso de riesgo leve o moderado) y 24 horas (en caso de riesgo severo) siguientes de la interposición de la denuncia conforme al citado art. 16 de la Ley de la materia N° 30364.

SEPTIMO: MEDIDAS DE PROTECCION

Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación.

OCTAVO: VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:

8.1. Que, el artículo 12.1 numeral a y b del Reglamento de la Ley N° 30364 señala: "...a la posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar de inocencia, si es que no advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Para ello se evalúa la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud del testimonio y la persistencia en la imputación. B. La importancia de que la retractación de la

víctima se evalué tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que proviene la víctima y la persona denunciada";

8.2. Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30364 señala: " El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses del Ministerio Público, los establecimientos públicos de salud, los centros parroquiales y los establecimientos privados emiten certificados o informes relacionados la salud mental de las víctimas que pueden constituir medios probatorios en los procesos de violencia. Los informes psicológicos de los Centros de emergencia Mujer y otros servicios estatales especializados también tienen valor probatorio en los procesos por violencia. Los certificados e informes se realizan conforme los parámetros que establezca la institución especializada. Los certificados tienen valor probatorio al momento de emitir las medidas de protección, mediante cautelares así como la acreditación del ilícito penal correspondiente...".

Que, a efectos de resolver las medidas de protección solicitadas, este despacho considera:

8.3. Que, al presentar la denuncia efectuada por **VIOLETA VALLEJOS AZUCENA** en contra de **WILMER APOLINARIO SANCHEZ MELENDEZ** la denunciante ha manifestado a nivel policial: *"...que su esposo constantemente le agrede verbal y psicológicamente tanto a ella como a sus menores hijos asimismo refiero que en anteriores ocasiones recibió maltrato físico pero por temor nunca e acerco a una dependencia policial..."*.

8.4. Estando a lo expuesto precedentemente, no obstante que las medidas de protección no exigen el grado de verosimilitud que es presupuesto de una medida cautelar, tampoco pueden ser concedidas sólo a la luz de la versión unilateral de la parte denunciante.

8.5. Si bien es cierto, mediante oficios N° 1997-2019-REGPOL-CALLAO/DIVOPUS-03-CIA VLR - VF, N° 1998-2019-REGPOL-CALLAO/DIVOPUS-03-CIA VLR - VF, N° 1999-2019-REGPOL-CALLAO/DIVOPUS-03-CIA VLR - VF, N° 2000-2019-REGPOL-CALLAO/DIVOPUS-03-CIA VLR - VF y N° 2001-2019-REGPOL-CALLAO/DIVOPUS-03-CIA VLR - VF se solicitó se practique reconocimiento médico legal a **JHANS EDGAR QUIÑONES VALLEJOS (15 AÑOS)**, **NESTOR MARTIN VALLEJOS AZUCENA (13 AÑOS)**, **MIA MARIANA SANCHEZ VALLEJOS (08 AÑOS)** y **DANIEL ISAAC SANCHEZ VALLEJOS (04 AÑOS)** los cuales datan del 23 de julio del 2019, no obstante el tiempo transcurrido a la fecha de remisión de la presente denuncia al juzgado, no obra en autos documentos o pericias que determinen el grado de afectación psicológica de la agraviada aunado al hecho que, no ratifico su denuncia a pesar de encontrarse debidamente notificada por la Comisaria de Villa Los Reyes. Por lo que no se **ha logrado determinar que el presente caso se encuentra dentro del ámbito aplicación de la Ley 30364, conforme lo establece el artículo 4°, por lo tanto NO corresponde otorgarse medidas de protección a favor del denunciante.**

Por estas consideraciones y normas glosadas, de conformidad con las normas glosadas y conforme a lo dispuesto por el artículo 22° y 23° de la Ley 30364; **EL JUZGADO CIVIL SEDE DE MI PERU, RESUELVE:**

Primero: NO OTORGAR POR AHORA ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN a favor de VIOLETA VALLEJOS AZUCENA, JHANS EDGAR QUIÑONES VALLEJOS(15 AÑOS), NESTOR MARTIN VALLEJOS AZUCENA (13 AÑOS), MIA MARIANA SANCHEZ VALLEJOS (08 AÑOS) y DANIEL ISAAC SANCHEZ VALLEJOS (04 AÑOS) por presuntos actos de Violencia Familiar (en la modalidad de violencia Psicológica) generados por WILMER APOLINARIO SANCHEZ MELENDEZ.

Segundo Remítase los actuados a la Mesa de Partes de las Fiscalías de Ventanilla, a fin de que derive a LA FISCALIA CORRESPONDIENTE para las investigaciones que convendrían, conforme a lo dispuesto en artículo 16- B de la Ley 30364; **informando a este Juzgado el resultado de la investigación**, dejándose copias certificadas de los autos por secretaría.